

LAS FUENTES DEL DERECHO VATICANO. COMENTARIO LEGISLATIVO DE LA NUEVA LEY LXXI DE FUENTES DEL DERECHO DE 1 DE OCTUBRE DE 2008

JOSÉ LANDETE

SUMARIO

I • LOS INICIOS DEL DERECHO VATICANO. II • MOTIVOS QUE HAN JUSTIFICADO LA NUEVA PROMULGACIÓN. III • ANÁLISIS DEL TEXTO LEGISLATIVO. 1. Aspectos formales. 2. Reformas materiales: aspectos generales. 3. Reformas materiales: aspectos especiales. **IV • CONCLUSIONES.**

I. LOS INICIOS DEL DERECHO VATICANO

La conocida «cuestión romana» fue resuelta el 11 de febrero de 1929, mediante la firma de un conjunto de instrumentos jurídicos conocidos comúnmente como «Pactos Lateranenses»¹, y que se integran por un Tratado, con cuatro anexos², y por un Concordato. Al respecto, y como expresión de la voluntad del Romano Pontífice al proceder a su ratificación, se pronunció S.S. Pío XI: «*Un Trattato inteso a riconoscere e, per quanto “hominibus licet”, ad assicurare alla Santa Sede una vera e propria e reale sovranità territoriale (non conoscendosi nel mondo, almeno fino ad oggi, altra forma di sovranità vera e propria se non appunto territoriale) e che evidentemente è necessaria e dovuta a Chi, stante il divino mandato e la divina*

1. Publicados en AAS, 21 (1929), pp. 209-295. Respecto del ordenamiento jurídico previo a la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano, *vid.* A. GENTILI, «Brevi note sull'ordinamento giuridico dello Stato Città del Vaticano fino al 1983», en *Apollinaris*, 65 (1992), pp. 715-742.

2. 1. Territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano; 2. Inmuebles con privilegio de extraterritorialidad y con exención de expropiaciones y de tributos; 3. Inmuebles exentos de expropiación y de tributos; 4. Convención financiera.

rappresentanza ond'è investito, non può essere suddito di alcuna sovranità terrena. [...] Un Concordato poi, che volemmo fin dal principio inscindibilmente congiunto al Trattato, per regolare debitamente le condizioni religiose in Italia, per sì lunga stagione manomesse, sovvertite, devastate in una successione di Governi settari od ubbidienti e ligi ai nemici della Chiesa, anche quando forse nemici essi medesimi non erano»³.

Coincidiendo con el día del intercambio de ratificaciones, el 7 de junio de 1929, el Sumo Pontífice promulgó un conjunto de leyes que iniciaban el devenir histórico del nuevo ordenamiento jurídico vaticano. Las seis leyes se intitulaban: 1. Ley fundamental de la Ciudad del Vaticano; 2. Ley sobre las fuentes del Derecho; 3. Ley sobre la ciudadanía y la residencia; 4. Ley sobre el ordenamiento administrativo; 5. Ley sobre el ordenamiento económico, comercial y profesional; y 6. Ley sobre seguridad pública.

A ese primer grupo de leyes se sumaron posteriormente otras sucesivas, que regulaban nuevas materias (por ejemplo, el ordenamiento judicial) o que reformaban materias existentes⁴.

La reforma más importante del Derecho vaticano se produjo en el año 2000, cuando el Sumo Pontífice Juan Pablo II promulgó la Ley fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, por la que se derogaba la Ley I de 1929, y se instituía un nuevo orden constitucional y de gobierno⁵.

3. Pío XI, *Sermo «Il nostro più cordiale» ad parochos urbis et concionatores sacri temporis quadragesimalis*, de 11 de febrero de 1929; *vid.* en http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19290211_piu-cordiale_it.html. Acerca de las especiales relaciones existentes entre el nuevo estado y la persona del Romano Pontífice, *vid.* W. SCHULZ, «Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede. Alcune riflessioni intorno al loro rapporto giuridico», en *Apollinaris*, 51 (1978), pp. 661-674.

4. Al respecto, *vid.* G. DALLA TORRE, «L'ordinamento costituzionale vaticano nel suo sviluppo storico», en F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Florencia 1932, pp. 483-517. Cfr. también, G. CORBELLINI, «Riflessioni sulla legislazione dello Stato della Città del Vaticano», en *STUDIUM ROMANAE ROTAE, Corpus Iuris Canonici III. Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, a cura di P. V. PINTO, Ciudad del Vaticano 2003, pp. 757-774.

5. *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, 26 de noviembre de 2000 (AAS Suppl., 71 [2000], pp. 75-83). Para un estudio detallado de esta Ley, *vid.* J. I. ARRIETA, «La nueva Ley fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano y las sucesivas reformas del Gobierno del Estado», en *Ius Canonicum*, XLI, 82 (2001), pp. 707-728. Cfr., también, P. AMENTA, «La nuova legge fondamentale dello stato della Città del Vaticano: prime valutazioni», en *Apollinaris*, 75 (2002), pp. 243-262; C. CARDIA, «La nuova Legge Fondamentale dello Stato Città del Vaticano», en C. CARDIA (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, Giap-

Con estos antecedentes, el Sumo Pontífice Benedicto XVI, mediante *Motu Proprio* de 1 de octubre de 2008, ha promulgado la Ley LX-XI sobre las fuentes del Derecho⁶, en el cuarto año de su Pontificado⁷. La ley entró en vigor el día 1 de enero de 2009 (art. 13 LFD), sustituyendo integralmente a su precedente de 1929⁸ —Ley II—.

II. MOTIVOS QUE HAN JUSTIFICADO LA NUEVA PROMULGACIÓN

Los motivos que justifican este cambio legislativo son dos, aunque formalmente sólo se alega uno de ellos en el propio texto normativo.

El motivo formal que ha movido al legislador a promulgar la nueva ley radica en *la actualización y adecuación de la ley sobre fuentes del Derecho al nuevo orden constitucional inaugurado con la Ley Fundamental*. Ello se puede apreciar a lo largo del articulado, en el cual se incluye la mención a las reformas llevadas a cabo en determinadas materias (por ejemplo, en el procedimiento civil), la previsión de nuevas materias no incluidas en la ley precedente (por ejemplo, la legislación en materia laboral) o la incorporación de las nuevas reservas realizadas.

Sin duda, a ello se unen también los cambios introducidos en el Derecho canónico, con la promulgación de los dos Códigos y la reforma de la Curia Romana. La elaboración de una nueva Ley vaticana ha permitido una mejor adaptación o acomodación formal del sistema de fuentes del Estado al *Corpus Iuris Canonici*.

Junto a este motivo podemos encontrar otro, de mayor importancia, si cabe, para comprender la finalidad de la reforma. Ha sido este cambio el que mayor repercusión ha tenido en los medios de comunica-

pichelli, Turín 2003, pp. 175-185. Sobre aspectos parciales, relativos a los poderes del Estado, *vid.*: G. CORBELLINI, «Il governo dello Stato della Città del Vaticano e la nuova Legge Fondamentale», en *Apollinaris*, 77 (2004), pp. 623-665; G. DALLA TORRE, «L'attività giudiziale nello Stato della Città del Vaticano e la Legge Fondamentale», en *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), pp. 347-367.

6. En adelante podrá ser abreviada como «LFD».

7. *Legge n. LXXI, sulle fonti del diritto*, de 1 de octubre de 2008 (AAS *Suppl.*, 79 [2008], pp. 65-70).

8. *Legge n. II, sulle fonti del diritto*, de 7 de junio de 1929 (AAS *Suppl.*, 1 [1929], pp. 5-13).

ción italianos, que no han dudado de calificarlo como un «divorcio» o como una profundización del «foso que separa las dos riveras del Tíber»⁹. Se trata de la modificación del régimen de reenvío a la legislación del Estado de Italia como fuente supletoria del ordenamiento jurídico vaticano.

III. ANÁLISIS DEL TEXTO LEGISLATIVO

Entrando a analizar con más detalle los cambios normativos realizados, seguiremos un método exegético con el fin de ofrecer un estudio lo más exhaustivo posible, dentro de los límites normales de un trabajo de este estilo.

1. Aspectos formales

En sus aspectos formales, más allá de una sensible reducción del articulado (13 artículos, frente a los 25 de su precedente), se aprecian dos innovaciones que sitúan la nueva ley en el contexto contemporáneo —en lo que respecta a la técnica legislativa actual—:

1. Se ha incluido un preámbulo justificativo, inexistente en la ley de 1929. Si bien es cierto que tiene una extensión mínima, aporta el principal motivo que da origen a la ley: «*Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000 [...]»*.

2. Se ha introducido la correspondiente rúbrica a cada artículo, de forma que facilita la búsqueda de las materias reguladas.

En lo restante, tanto la fórmula legislativa inicial, como su conclusión, son idénticas en ambos textos *mutatis mutandis*. Asimismo coincide el medio de promulgación: el tradicional *Supplemento per le Leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano del Acta Apostolicae Sedis*.

9. A estas críticas responde G. DALLA TORRE en una entrevista concedida a «Radio Vaticana» el 31 de diciembre de 2008, y que puede ser consultada en la website <http://www.radiovaticana.org>.

2. *Reformas materiales: aspectos generales*

La estructura interna de la ley puede ser dividida en dos partes principales: una general (artículos 1 a 3), en la que se establecen las fuentes del Derecho, su modo de publicación, *vacatio legis* y archivo; y otra especial (artículos 4 a 12), en la que se determinan los textos normativos aplicables por materias. Concluye el articulado una norma (art. 13) sobre la abrogación de la ley anterior y la entrada en vigor de la nueva.

El artículo 1, bajo la rúbrica «*Fonti principali del diritto*», enumera aquellas fuentes que el legislador considera básicas para el ordenamiento jurídico vaticano y a las que reserva las materias más importantes para el Estado. Tales fuentes son: el ordenamiento jurídico canónico —que ocupa un lugar jerárquico y hermenéutico primacial en el sistema de fuentes—, las normas vaticanas promulgadas por la competente autoridad y el Derecho internacional. Al respecto, podemos señalar las siguientes innovaciones:

— La nueva ley se refiere a todo el ordenamiento canónico como primera fuente normativa e interpretativa, a diferencia de la ley de 1929, que se remitía al *Codex Iuris Canonici* y a las Constituciones Apostólicas como fuentes principales «del Derecho objetivo». Esta novedad se comprende perfectamente a raíz de la promulgación del nuevo *Corpus Iuris*, integrado por ambos Códigos y por la legislación universal vigente¹⁰.

10. Sobre la especial relación entre el ordenamiento vaticano y el ordenamiento canónico, expone d'Avack: «E ciò, si noti bene, non si verifica già, come negli altri Stati, in virtù de un qualunque fenomeno di rinvio, per semplice apprezzamento subiettivo volontario e mutabile del legislatore, ricevendo applicazione solo per questa o quella parte ed assunto in ogni modo il valore di semplice fonte accesoria; sibbene si attua in virtù di un rapporto che è ben più intimo e ben più organico dello stesso rinvio recettizio e che, como a ragione osserva il Cammeo, "neppure è suscettibile di classificazione perché rappresenta un fenomeno unico nel mondo giuridico"; si verifica per una vera necessità intrinseca ed obiettiva insita nella natura stessa giuridica dello Stato, che senza di esso non potrebbe più sussistere, quale per lo meno è stato creato e configurato; si effettua per la sua totalità e interezza (in quanto naturalmente di fatto applicabile), ricomprendendo sia quello vigente al momento della creazione del nuovo Stato, sia quello di futura emanazione; e si concretizza infine assumendo il valore e la portata di una vera fonte principale, prevalente ad ogni altra fonte di diritto ed in specie alla fonte ordinaria dell'ordinamento giuridico vaticano sulle materie temporali che è per ora in genere la legge vaticana», P. A. D'AVACK, «Il rapporto giuridico fra lo Stato della Città del Vaticano, la Santa Sede e la Chiesa Cattolica», en P. A. D'AVACK, *Vaticano e Santa Sede*, a cura di C. CARDIA, Bolonia 1994, pp. 193-194. La cita incluída corresponde a F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Florencia 1932, p. 174.

— Dentro del ordenamiento jurídico vaticano se reconoce un sistema jerárquico de fuentes, en el cual la Ley fundamental ocupa la cúspide y a ella se subordinan las demás leyes, decretos o reglamentos. A este respecto merece ser destacada la mención expresa que se realiza de la Pontificia Comisión, como órgano propiamente legislativo para el Estado de la Ciudad del Vaticano¹¹, así como la distinción técnica entre normas legislativas (párrafo 2) y normas administrativas (párrafo 3).

— Finalmente, se introduce como fuente normativa el Derecho internacional, aunque siempre dentro del respeto imperado a la posición primacial del Derecho canónico¹². Al respecto resulta llamativo el tenor literal del precepto, pues en él se remite al «*diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte*». Al referirse a estos tratados y acuerdos, el legislador no hace sino reafirmar el carácter instrumental o funcional del Estado de la Ciudad del Vaticano respecto del Romano Pontífice y de la Santa Sede, y por ello debemos entender también comprendidos bajo este tenor los Tratados y Acuerdos de los que es parte el propio Estado de la Ciudad del Vaticano¹³.

Sobre las relaciones entre el Derecho canónico y el Derecho vaticano se había planteado en la doctrina un doble debate. El primero, acerca de si el ordenamiento canónico debía ser utilizado, también, como criterio interpretativo de las normas vaticanas¹⁴. El segundo debate se centraba en las relaciones de dependencia y subordinación de las leyes estatales a las canónicas. Si, respecto de la primera cuestión, el nuevo artículo 1 sale al paso estableciendo que el derecho canónico es «*il primo criterio di riferimento interpretativo*», sigue sin aclararse los términos de la segunda. En este sentido, es posible seguir sosteniendo que «*le leggi dettate per lo Stato della Città del Vaticano hanno prelazione sulle norma canoniche menzionate prima, nelle materie non esclusivamente sottoposte a queste ultime. Più che di una pre-*

11. Vid. C. CARDIA, «La nuova Legge Fondamentale dello Stato de la Città del Vaticano. Il rapporto tra potestà legislativa e potestà esecutiva», en *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), pp. 311-346.

12. Cfr. c. 3 CIC. Sobre los efectos que en el sistema de fuentes vaticanas ejercen los Pactos Lateranenses, particularmente, vid. P. A. BONNET, «Le fonti normative e la funzione legislativa», en F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico...*, cit., pp. 538-547.

13. Al Sumo Pontífice le corresponde la representación del Estado en las relaciones internacionales, la cual ejerce por medio de la Secretaría de Estado (vid. art. 2 de la Ley Fundamental).

14. Sobre ambas posturas, cfr. F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico...*, cit., pp. 176-179, y P. CIPROTTI, *Appunti di Diritto privato vaticano*, Roma 1938, p. 47.

rogativa di “efficacia giuridica” delle suddette norme vaticane, questo fatto non è che il risultato della priorità del diritto particolare sul diritto universale che, seguendo la regola di Bonifacio VIII “*generi per speciem derogatur*”, ha tradizionalmente sancionado il diritto canonico, a riprova, inoltre, della sua vigenza nell’ordinamento vaticano a livello generale»¹⁵.

El artículo 2 regula la «*pubblicazione, entrata in vigore e conservazione*». Corrigiendo a su paralelo en la ley derogada, el nuevo precepto mejora la sistemática al organizar su estructura interna según el procedimiento normativo (publicación, *vacatio legis* y archivo). Con carácter general, se conserva la disciplina anterior respecto a la publicación formal de las leyes¹⁶ —con número romano correlativo y, cuando no se indique algo distinto, en el suplemento especial del *Acta Apostolicae Sedis*—, la entrada en vigor —salvo especial indicación¹⁷, siete días desde su publicación—, y la custodia y archivo —encargada al Archivo del *Governatorato*—.

El artículo 3 recoge la reforma que más repercusiones ha tenido en los medios de comunicación¹⁸. Se trata de la disciplina que regula la «*recezione della legislazione italiana*». Los cambios sustanciales en esta materia se traducen en la necesidad de una recepción expresa de la legislación italiana.

El derogado artículo 3, en el contexto socio-político en el que fueron promulgadas las primeras normas vaticanas, se remitía directamente a la legislación italiana como fuente supletoria en cuantas materias no se hubiese regulado ni en sede canónica ni en sede vaticana. Esa aplicación era necesaria y automática, con el límite del Derecho divino o los principios generales del Derecho canónico, así como de las normas acordadas entre Italia y la Santa Sede, siempre que dicha aplicación fuese posible se-

15. J. I. ARRIETA, *Codice di norme vaticane*, Venecia 2006, p. 48. Cfr. también, F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico...*, cit., pp. 170 y 172-174.

16. La Ley de 1929 se refería expresamente también a los reglamentos. A pesar de que el artículo actual no se refiere a ellos, en aplicación del art. 1.3 LFD, debe aplicarse el mismo régimen de las leyes a los decretos, reglamentos y cualquier otra disposición normativa.

17. Sobre este particular se ha omitido la referencia del anterior texto legislativo que admitía una especial norma de *vacatio legis* por la especial naturaleza del objeto regulado. Sin duda la vigente ley ha apostado por una mayor seguridad jurídica, exigiendo la constancia formal de la alteración de la regla normal de entrada en vigor. Por otro lado, la reforma más significativa en este particular consiste, sin duda, en la omisión del especial modo de publicación previsto en el derogado artículo 24, al no contemplarse la competencia normativa de urgencia del Gobernador, innecesaria a la luz del art. 3 de la Ley Fundamental.

18. Vid. J. M. SERRANO RUIZ, «In vigore la nuova legge sulle fonti del diritto», en *L'Osservatore Romano*, 31 de diciembre de 2008.

gún el *statu quo* existente en la Ciudad del Vaticano. Más allá de la adecuación de la referencia al nuevo orden constitucional italiano¹⁹, en la nueva ley se cambia la relación jurídica entre ambos ordenamientos, ya que el Derecho italiano²⁰ no se configura como un Derecho supletorio, sino como un Derecho aplicable mediante previa recepción formal. Los presupuestos, pues, para proceder a dicha aplicación, son dos: la existencia de una laguna en el ordenamiento jurídico vaticano y el acto formal de recepción realizado por la competente autoridad vaticana. Los límites de la recepción se mantienen inalterados, aunque según el nuevo modo de relaciones interordinamentales, dejan de funcionar como un control *ex post* para configurarse, también, como presupuesto previo a la recepción²¹.

3. Reformas materiales: aspectos especiales

El resto del articulado recoge las normas aplicables en función de la materia tratada: civil (art. 4), penal (art. 7), procesal (arts. 6, 8 y 10), educativa (art. 11) y administrativa (art. 12). Se trata de la primera aplicación de la recepción explícita de la legislación italiana prevista en el artículo 3, pues, salvo las materias ya reguladas por normas vaticanas o reservadas a éstas, se produce una recepción general del ordenamiento material del Estado italiano.

Las fuentes de *Derecho civil* aplicables en el Estado de la Ciudad del Vaticano seguirán siendo, con carácter general, las italianas. Así lo afirma el art. 4 al remitirse formalmente al Código civil italiano de 16 de marzo de 1942, recordando nuevamente los límites del art. 3. Los cambios más significativos se producen en las materias reservadas:

19. De «Regno d'Italia» a «Stato Italiano».

20. Pese a que ya no se hace referencia a los reglamentos generales y locales de la Provincia o del *Governatorato* de Roma debemos entenderlos incluidos en la fórmula amplia utilizada. Respecto al Derecho de la Unión Europea, dada la especial naturaleza jurídica de sus normas, debemos entenderlo también incluido, por cuanto ha habido una previa cesión de soberanía estatal, y los actos comunitarios se integran en el ordenamiento jurídico nacional como fuentes propias. En este sentido, *vid.* J. I. ARRIETA, *Codice di norme...*, cit., pp. 52-56.

21. De un análisis detallado de la ley podemos concluir que se han recibido todas aquellas materias que no habían sido abrogadas previamente por otras leyes, a excepción de la materia mercantil. En efecto, el art. 12 de la Ley de 1929, en el cual se recibía el Código de Comercio del Reino de Italia, «*insieme con le leggi che lo hanno modificato ed integrato*», no tiene paralelo en la presente ley, lo cual podría originar una laguna en el ordenamiento jurídico vaticano, subsanable interpretando que dicho Código de Comercio, recibido en 1929, cumple con el requisito establecido en el art. LFD y en consecuencia continúa siendo aplicable.

— Se mantiene la reserva a la ley canónica en lo referente a la capacidad jurídica y de obrar de clérigos y miembros de Institutos de Vida Consagrada religiosos y de Sociedades de Vida Apostólica que ostenten la ciudadanía vaticana, el matrimonio, la prescripción de bienes eclesiásticos y las donaciones y legados en favor de las causas pías. No hay innovación en esto, pues todas estas reservas se encontraban hechas ya en la ley de 1929 (art. 11), por lo que ahora se ha procedido a actualizar las referencias a los cánones aplicables y la adaptación de la terminología²².

— Por lo que respecta a las reservas a la ley vaticana, ésta se prevé en relación con la ciudadanía vaticana²³, la adopción²⁴, las inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción²⁵, el registro de ciudadanía y el censo, las relaciones laborales²⁶, la capacidad para ejercer el notariado²⁷, así como el registro hipotecario y el catastro²⁸.

22. Se sustituye la expresión «dei chierici e dei religiosi» por la de «dei chierici, dei membri degli Istituti di vita consacrata religiosi e delle Società di vita apostolica».

23. En el nuevo tenor literal se prescinde de la mención del Tratado entre la Santa Sede y el Reino de Italia que preveía la promulgación de una ley especial sobre ciudadanía. *Vid.* Ley n. III sobre la ciudadanía y la residencia, de 7 de junio de 1929 (AAS *Suppl.*, 1 [1929], pp. 14-21).

24. El artículo 4 LFD establece que la adopción deberá ser autorizada por el Sumo Pontífice. Entendemos que se trata de un acto que adopta como Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, habida cuenta que el canon 110 CIC se remite a las legislaciones civiles a los efectos de determinar el procedimiento y la validez del acto de adopción. En cualquier caso, dado que no se prevé el procedimiento ni se detallan los elementos necesarios para la adopción, deberá aplicarse en vía supletoria la legislación italiana.

25. En este caso la reserva se realiza frente a la normativa canónica, pues en la ley de 1929 se establecía que «gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti in occasione del battesimo o del matrimonio o della celebrazione dei funerali e conservati dal parroco, che ne rimette copia al Governatore» (art. 11.g).

26. Esta reserva es novedosa, pues no se encontraba prevista en la Ley de 1929. A pesar de ello, se trata de una de las materias en las que más ha incidido el legislador vaticano. Para su consulta y estudio, *vid.* J. I. ARRIETA, *Codice di norme...*, cit., capítulo IV.

27. Sobre el notariado el legislador ha decidido asignar su ejercicio a los abogados de la Santa Sede (art. 185 Const. Ap. *Pastor Bonus*), en sustitución de los antiguos abogados consistoriales, y al mismo tiempo ampliar la posibilidad de ejercer este oficio en el Estado de la Ciudad del Vaticano a los abogados rotales o civiles que estén integrados o trabajen para el *Governatorato*. La Ley precedente sobre fuentes del Derecho preveía una remisión a la legislación italiana en lo referente al ejercicio de dicha función. El silencio de la nueva ley no puede conducir a concluir que dicha legislación notarial no sea aplicable, pues la LFD sólo prevé la reserva en lo referente a la capacidad de ejercer dicha función.

28. Nuevamente se establece el ejercicio de estas funciones por un órgano vaticano, aunque no se prevé una legislación especial que lo regule. Por tanto, mientras no se promulgue una ley especial al efecto, deberá entenderse realizada la remisión a la legislación italiana en la recepción general del art. 4 LFD.

Sobre el *Derecho penal*, el artículo 7 recoge una expresa remisión al Código penal italiano, de 30 de junio de 1889. Sin embargo, esta remisión no es tan clara como en el caso civil. De hecho, el ordenamiento penal vigente se caracteriza por una suerte de provisionalidad y el propio legislador advierte de su intención de definir un nuevo sistema penal. Debemos hacer mención a las reformas previas que, en materia penal, se han producido en el Derecho vaticano para comprender plenamente el sentido de dicha remisión.

La Ley de 1929 se remitía a la legislación italiana para determinar la norma penal material aplicable a los delitos cometidos en el Estado de la Ciudad del Vaticano. En concreto, el art. 4 recibía el Código penal italiano —con sus sucesivas modificaciones y desarrollos—, así como las normas penales protectoras de la persona de los Jefes de Estado de sus respectivos países para reprimir los atentados contra tales autoridades cometidos en territorio vaticano. Respecto a los delitos contra la persona del Sumo Pontífice, se remitía al artículo 1 de la Ley italiana n. 2008, de Medidas para la Defensa del Estado, de 25 de noviembre de 1926. También preveía determinadas medidas de ejecución de las penas pecuniarias —bien como penas principales, bien como alternativas o sustitutivas de las privativas de libertad (arts. 5 y 6)—. Estos dos últimos artículos ya habían sido objeto de abrogación por leyes especiales vaticanas; en concreto, por la Ley n. L, de modificación de la legislación penal y la legislación procesal penal, de 21 de junio de 1969²⁹, y por la Ley n. LII, sobre las penas pecuniarias y sobre la prescripción en materia penal, de 10 de enero de 1983³⁰. Es destacable que en estas reformas se alteraba el tenor literal de algunos preceptos del Código penal italiano, por lo que dicho texto admitía dos versiones: la italiana y la «vaticana». La actual disciplina prescribe la aplicación del Código penal italiano «*come modificato ed integrato dalle leggi vaticane*» (art. 7 LFD).

El párrafo segundo establece que, para la sustitución de la pena privativa, se deba proceder conforme a lo ya establecido en la ley. No indica qué ley es la que regula esta sustitución punitiva, lo cual podría provocar problemas para cumplir el necesario reenvío a la legislación italiana impuesto en el art. 3. Sin embargo, dado que en el párrafo anterior se ha recibido el Código penal italiano «*fino a che non si provveda a nuova*

29. AAS Suppl., 41 (1969), pp. 13-26.

30. AAS Suppl., 53 (1983), pp. 81-87.

definizione del sistema penale», deberá estarse a lo en él dispuesto, a salvo de norma específica vaticana.

Las otras previsiones del artículo 7 recogen reservas a la remisión inicial. En primer lugar, para la conversión a euros de las penas pecuniarias expresadas en liras italianas, la Ley de Fuentes del Derecho reserva la competencia a las autoridades vaticanas, remitiéndose al procedimiento que a tal efecto establezca el Cardenal Presidente del *Governatorato*. En segundo lugar, se reserva a la ley vaticana la tipificación y sanción de los ilícitos administrativos.

Las *fuentes procesales* aplicables en la Ciudad del Vaticano se determinan en los artículos 5 y 8 LFD. El artículo 5 establece que para el ámbito civil se aplicará el Código de Procedimiento Civil vaticano de 1 de mayo de 1946, con sus sucesivas reformas, mientras que el artículo 8 se remite al el Código de Procedimiento penal italiano de 27 de febrero de 1913. En lo referente a la ley ritual penal la remisión se realiza, dentro de los límites legales, de una forma semejante a lo establecido con la ley material: se recibe la «versión vaticana» del Código italiano, tras las reformas introducidas por las leyes n. L y LII, entre otras³¹, mientras no se promulgue una nueva disciplina del rito.

Una vez establecido el procedimiento aplicable, el legislador ha querido determinar los poderes del juez a la hora de colmar las lagunas legales existentes. En este sentido, en materia civil (art. 6 LFD) se recoge la misma previsión del derogado art. 22³², al ordenar al juez que colme esas lagunas recurriendo a los preceptos del Derecho divino y del Derecho natural, así como a los principios generales del ordenamiento jurídico vaticano³³. Conviene recordar que la laguna podrá provenir por la inexistencia de la norma o por la inaplicabilidad de la misma —por ejemplo, por no haberse recibido expresamente o por contravenir los límites de la recepción—. En materia penal los poderes del juez se amplían, con una función no sólo integradora, sino también innovadora, pues podrá sancionar, dentro de los límites

31. Cfr. J. I. ARRIETA, *Codice di norme...*, cit., p. 194.

32. Es destacable la precisión de la función judicial respecto de la legislativa al no contemplarse en el nuevo precepto la referencia que se incluía en su precedente: «*il giudice, tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali del diritto canonico, decide applicando quel criterio che seguirebbe, se fosse legislatore*».

33. Esta previsión parece excluir en el proceder judicial los modos de colmar las lagunas previstos en los ordenamientos jurídicos canónico (cfr. c. 19 CIC) e italiano, pues se prevé un sistema específico.

penales del art. 9 LFD, las conductas no tipificadas que ofendan los principios de la religión o de la moral, el orden público o la seguridad de las personas o de las cosas. En estos casos, el juez podrá remitirse a los principios generales de la legislación para determinar la responsabilidad del infractor³⁴.

Finalmente, dentro de las fuentes aplicables al Derecho procesal vaticano, el art. 10 LFD reserva a la ley vaticana la representación y patrocinio procesal, y a la práctica forense canónica la regulación del juramento de las partes, testigos, peritos y cualquier otra persona que deba prestarlo al comparecer en juicio.

En materia de *enseñanza*, el art. 11 LFD ha reformado algunas previsiones de su precedente (art. 21 de la Ley de 1929). En concreto:

— Se afirma la especificidad del ordenamiento vaticano sobre el sistema escolar, el cual se sujeta al Magisterio de la Iglesia sobre la base del respeto al derecho primario de los padres a educar a sus hijos.

— La obligatoriedad de la escolarización se amplía más allá de la «*istruzione elementare*» prevista en 1929 a la entera «*istruzione scolastica*». Asimismo se modifica el límite de edad de la obligación, pues si la anterior ley obligaba desde los 6 a los 14 años, ahora abarca desde los 6 a los 18 años.

— El sistema escolar aplicable será aquél previsto en los Estados correspondientes. En este caso se amplía la recepción de legislaciones extranjeras, pues la anterior norma únicamente contemplaba como lícito la escolarización en las escuelas de Roma designadas por el Gobernador, previo acuerdo con las autoridades locales. En cualquier caso, ese sistema se preveía provisional, pues se mantendría en vigor «*finché non sieno istituite scuole nella Città del Vaticano*». Obviamente, la presente ley ha modernizado la disciplina al contemplar la posibilidad de escolarización de los hijos en aquellos países donde se encuentren sus padres.

— En ambos textos legislativos se admite la posibilidad de la escolarización domiciliaria cuando los padres o tutores demuestren la suficiente capacidad para ello y cuenten con los medios idóneos. Es destacable que

34. Se reitera en el ordenamiento vaticano la previsión contenida en el c. 1399 CIC para el canónico y, por ello, puede ser objeto, *mutatis mutandis*, de las mismas críticas que para éste se han realizado. Por todos, *vid.* J. SANCHIS, «Comentario al canon 1399», en Á. MARZOA-J. MIRAS-R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coords.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, 3ª ed. actualizada, Pamplona 2002, vol. IV/1, pp. 597-598.

en la vigente norma se ha derogado la sanción prevista en 1929 para aquellos padres o tutores que desobedecieran la obligación de escolarización.

Por último, el legislador recoge una nueva remisión a la legislación italiana respecto de las *normas administrativas* aplicables³⁵. Previendo la posible promulgación de leyes específicas vaticanas, y en su defecto, se aplicarán por reenvío las leyes del Estado italiano. En concreto:

— La legislación estatal, comprendiendo como tal la contenida en Tratados internacionales ratificados por Italia, para aquellas materias relativas a pesos y medidas, propiedad industrial, ferrocarriles, correos y telecomunicaciones, redes eléctricas, aviación, automóviles y tráfico y defensa contra enfermedades infecto-contagiosas (art. 12.1.a LFD). Como único requisito se exige que dicha normativa se encuentre en vigor con anterioridad al 1 de enero de 2009. Las posibles modificaciones o promulgación de nuevas normas posteriores a dicha fecha deberán ser recibidas expresamente para poder ser aplicadas en el Estado de la Ciudad del Vaticano.

— La legislación italiana, con independencia de la fecha de su entrada en vigor, para la regulación de la policía urbanística y urbana, así como la higiene y sanidad públicas (art. 12.1.b LFD).

En ambos casos, cuando la legislación recibida prevea la actuación de la autoridad del Estado, la Ley de Fuentes del Derecho establece una norma interpretativa al comprender bajo dicha apelación al Presidente del *Governatorato*, o autoridad delegada por él (art. 12.3 LFD). En este mismo sentido, la norma reserva al Presidente la competencia para, en caso de necesidad pública, la expropiación o uso temporal de bienes privados, así como la prestación de obras y servicios, mediante decreto motivado y a cambio de la indemnización o justiprecio oportuno (art. 12.2 LFD).

IV. CONCLUSIONES

Transcurridos ochenta años desde la promulgación de las primeras leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano, y habiéndose procedido a la

35. Respecto de las materias contempladas bajo este epígrafe en la Ley de 1929 (art. 20), muchas de ellas ya habían sido objeto de regulación específica vaticana, lo cual dejaba sin efecto el reenvío a la normativa italiana. Tales materias no se contemplan ahora en el nuevo texto legal, a no ser para completar el contenido de las normas vaticanas y para evitar las lagunas de derecho. *Vid.*, J. I. ARRIETA, *Codice di norme...*, cit., p. 200.

reforma y modernización de los órganos constitucionales, el legislador vaticano ha considerado oportuno el momento para proceder a una actualización del *Derecho sobre el Derecho*. El tratado sobre las fuentes del Derecho constituye uno de los más importantes para comprender correctamente, no sólo el alcance o eficacia de la norma, sino incluso el sentido de la *mens legislatoris*³⁶, pues en él se refleja el «subconsciente» —permítaseme la expresión— del legislador. Efectivamente, cuando un legislador se regula a sí mismo, dotándose de procedimientos y reservándose materias, está persuadido de la necesidad de proporcionar una mayor seguridad, anticipando la solución a riesgos más o menos aparentes de antinomia o incongruencia, al ordenamiento jurídico que va a construir junto con los demás operadores del Derecho.

Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la Ley sobre Fuentes del Derecho de 1 de octubre de 2008. Debido a sus específicas características, el Estado de la Ciudad del Vaticano tiene necesidad de coordinar su ordenamiento jurídico interno con el de aquellos entes soberanos con quienes comparte misión o territorio. El legislador vaticano sale al encuentro de esta necesidad integrando plenamente las normas canónicas dentro del ordenamiento estatal, como fuentes primarias, y previniendo la aplicación, como fuentes supletorias, de las normas italianas.

En el primer caso, urgía una actualización del Derecho vaticano, consecuente con la reforma llevada a cabo durante las últimas décadas en el Derecho canónico. En el segundo caso, y sin prejuzgar ningún cambio en la confianza depositada en 1929 en el legislador italiano, resultaba procedente adoptar las modernas técnicas de relaciones interordinamentales que doten de una mayor seguridad jurídica al Derecho estatal vaticano. Precisamente la técnica del reenvío formal o expresa recepción es la elegida ahora, y cumple sobradamente las exigencias planteadas. Se mantienen los límites que ya aparecían en 1929 —derecho divino y principios generales del ordenamiento jurídico vaticano—, y al mismo tiempo se dota de mayor certeza al sistema de fuentes mediante el acto de voluntad expreso de la Autoridad.

36. Sobre la interpretación de la mente del legislador desde la teoría general de las fuentes del Derecho, *vid.*, por todos, J. OTADUY, «Los medios interpretativos de la ley canónica (y su relación con las distintas doctrinas de la interpretación)», en ÍDEM, *Fuentes, interpretación, personas. Estudios de Derecho canónico*, Pamplona 2002, pp. 306-307.

ANEXO

TABLA COMPARATIVA DE LOS DOS TEXTOS LEGALES

I. MATERIAS REGULADAS EN AMBAS LEYES

N. LXXI

LEGGE SULLE FONTI DEL DIRITTO

1 ottobre 2008

[AAS *Suppl.*, 79 (2008), pp. 65-70]

BENEDETTO PP. XVI

Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000, di Nostro Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Nostra Sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

Art. 1. *Fonti principali del diritto*

1. L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo.

2. Sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo.

3. Quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e

N. II

LEGGE SULLE FONTI DEL DIRITTO

7 giugno 1929

[AAS *Suppl.*, 1 (1929), pp. 5-13]

PIO PP. XI

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Sono fonti principali del diritto oggettivo nello Stato della Città del Vaticano:

a) il *Codex iuris canonici* e le Costituzioni Apostoliche;

b) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonché i regolamenti legittimamente emanati dall'autorità competente.

ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati.

4. L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1.

Art. 2. *Pubblicazione, entrata in vigore e conservazione*

1. Le leggi sono pubblicate con la data e con il numero romano progressivo per la durata di ciascun pontificato.

2. Le leggi entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un diverso termine.

3. Le leggi indicate nell'art. 1 n. 2 sono depositate nell'apposito Archivio del Governatorato e pubblicate nello speciale supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, eccetto che in casi particolari sia prescritta nella legge medesima una diversa forma di pubblicazione.

2. Le leggi e i regolamenti indicati nella lett. b del precedente articolo sono depositati nell'Archivio del Governatorato e pubblicati in un supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, eccetto che in casi particolari una diversa forma di pubblicazione sia prescritta nella legge o nel regolamento medesimo e salvo il disposto dell'articolo 24 della presente legge.

La pubblicazione è fatta colla data, colla quale le dette leggi e regolamenti sono emanati e con un numero progressivo per la durata di ciascun pontificato.

Dette leggi e regolamenti entrano in vigore il settimo giorno dalla loro pubblicazione, eccetto che per la natura dell'oggetto non debbano entrare in vigore subito, o nella stessa legge o regolamento non sia espressamente stabilito un termine minore o maggiore.

Art. 3. *Recezione della legislazione italiana*

1. Nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano.

2. Il recepimento è disposto purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi ge-

3. Nelle materie, alle quali non provvedano le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e fino a che non siasi provveduto con leggi proprie della Città del Vaticano, le leggi emanate dal Regno d'Italia fino alla data di entrata in vigore della presente insieme ai loro regolamenti generali ed a quelli locali della Provincia e del Governatorato di Roma,

nerali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.

indicati negli articoli seguenti e colle modificazioni e limitazioni specificate nei medesimi, sempre che dette leggi e regolamenti non sieno contrari ai precetti di diritto divino né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme del Trattato e del Concordato stipulati fra la S. Sede ed il Regno d'Italia nell' 11 febbraio 1929 e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.

Art. 4. *Norme civili*

Sotto le riserve specificate nell'art. 3, si osserva il Codice civile italiano del 16 marzo de 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata in vigore della presente legge, salve le seguenti riserve:

a) la cittadinanza vaticana è regolata da apposita legge vaticana;

b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli Istituti di vita consacrata religiosi e delle Società di vita apostolica, che siano cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica;

c) il matrimonio è regolato esclusivamente dalla legge canonica;

d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice;

e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, è regolata dai cann. 197-199 e 1268-1270 del *Codex iuris canonici*, osservandosi inoltre il can. 76 § 2 del medesimo *Codex*;

f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai cann. 1299-1300; 1308-1310 dello stesso *Codex*;

11. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice civile del Regno d'Italia, insieme con le leggi che lo hanno modificato od integrato e coi relativi regolamenti fino all'entrata in vigore della presente, salve le seguenti modificazioni:

a) la cittadinanza vaticana è regolata, conforme al Trattato fra la S. Sede e il Regno d'Italia, dalla legge in data odierna, numero III;

b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici e dei religiosi, che sieno cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica;

c) il matrimonio è pure esclusivamente regolato dalla stessa legge;

d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice;

e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, resta regolata dai canoni 1508-1512 del *Codex iuris canonici*, osservandosi inoltre il disposto dal canone 63 § 2 del medesimo *Codex*;

f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono re-

g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti a norma della legislazione vaticana;

h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti presso il Governatorato;

i) i rapporti di lavoro sono disciplinati da apposita normativa vaticana;

l) le funzioni di notaro sono esercitate da avvocati della Santa Sede designati dal Presidente del Governatorato. Con le stesse modalità, possono essere designati, per l'esercizio delle funzioni notarili, anche avvocati rotali o civili che abbiano un rapporto organico, o di collaborazione per contratto, con il Governatorato;

m) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli effetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie, sono esercitate dalla Direzione dei Servizi Tecnici. La stessa Direzione provvede anche alla tenuta ed aggiornamento del catasto.

golati dai canoni 1513-1517 dello stesso *Codex*;

g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti in occasione del battesimo o del matrimonio o della celebrazione dei funerali e conservati dal parroco, che ne rimette copia al Governatore;

h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti dal Governatore, a mezzo dell'ufficio all'uopo designato;

i) le funzioni di notaro sono esercitate da avvocati concistoriali designati dal Governatore, osservandosi, sempre sotto le riserve dell'articolo 3, la legislazione notarile del Regno d'Italia; l'archivio notarile è tenuto presso il Governatorato;

l) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli affetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie, sono esercitate da un ufficio presso il Governatorato. Lo stesso ufficio provvede anche alla tenuta e conservazione del catasto, sempre secondo la legislazione italiana, sotto le solite riserve. Sono presi, occorrendo, accordi fra il Governatorato e i competenti uffici italiani del Conservatore delle ipoteche e del Catasto per regolare in via transitoria la materia delle trascrizioni, delle iscrizioni ipotecarie e del catasto e per il trapasso dei relativi registri ed atti.

Art. 5. *Norme di procedura civile*

Si osserva il Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946, con le modificazioni successive, anche per la semplificazione e l'abbreviazione del rito.

13. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il Codice di procedura civile del Regno d'Italia, insieme con le leggi che l'hanno modificato o integrato ed ai relativi regolamenti prima dell'entrata in vigore della presente, e limitatamente al procedimento di esecuzione ed ai procedimenti speciali contemplati nel Libro

III, Titolo I (disposizioni comuni), Titolo III (assenza), Titolo V (minori), Titolo VI (interdizione ed inabilitazione), Titolo XIII (successioni), Titolo IX (offerta di pagamento e deposito), Titolo X (copia e collazione di atti pubblici), Titolo XII (esecuzione di sentenze straniere) modificato con decreto-legge del Regno d'Italia 30 giugno 1919, n. 1272.

Art. 6. *Poteri del giudice in materia civile*

Quando una controversia civile non si possa decidere con il riferimento ad una norma prevista dalle fonti indicate nei precedenti articoli, il giudice decide tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico vaticano.

22. Quando una controversia civile non si possa decidere con una precisa norma giuridica contenuta nelle fonti indicate nei precedenti articoli, anche perché la legislazione del Regno d'Italia richiamata in via suppletiva risulti per qualsiasi motivo inapplicabile, il giudice, tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali del diritto canonico, decide applicando quel criterio che seguirebbe, se fosse legislatore.

Art. 7. *Norme penali*

1. Fino a che non si provveda a nuova definizione del sistema penale, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.

2. La legge prevede i casi nei quali alle pene detentive possono essere sostituite sanzioni alternative e ne indica la natura, avuta presente la funzione educativa della pena.

3. Le pene pecuniarie espresse in lire italiane, convertite in Euro ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. CCCLXXI, sono determinate con provvedimento amministrativo del Cardinale Presidente

4. Sotto le riserve specificate nell'articolo precedente, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice penale del Regno d'Italia, insieme alle leggi che l'hanno modificato o integrato ed ai relativi regolamenti, fino all'entrata in vigore della presente.

Chiunque nel territorio della Città del Vaticano commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario di qualsiasi Stato estero retto a forma monarchica, contro il Capo di uno Stato estero retto a forma non monarchica, o contro il Capo del Governo del Regno d'Italia o di altro Stato, è punito colla stessa pena, colla

del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

4. Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni sono regolati da apposita legge vaticana.

Art. 8. Norme di procedura penale

Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice di procedura penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.

Art. 9. Poteri del giudice in materia penale

Qualora manchi qualunque disposizione penale e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice può richiamarsi ai principi generali della legislazione per comminare pene pecuniarie sino ad Euro tremila, ovvero pene detentive sino a sei mesi, applicando, se del caso, le sanzioni alternative di cui alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII.

quale sarebbe punito, se il fatto fosse commesso nel territorio dello Stato, al quale appartiene la persona contro cui il fatto è diretto.

La pena comminata contro chi nel territorio della Città del Vaticano commette un fatto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Sommo Pontefice è quella indicata nell'articolo 1 della legge del Regno d'Italia 25 novembre 1926, n. 2008.

7. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice di procedura penale del Regno d'Italia, insieme alle leggi che lo hanno modificato od integrato ed ai relativi regolamenti, fino all'entrata in vigore della presente, eccetto quanto concerne la competenza dei tribunali che è regolata dalla legge fondamentale e dalla presente, e salva, a tenore del Trattato fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia 11 febbraio 1929, la facoltà di delega del procedimento penale per i delitti alle autorità del Regno medesimo.

23. Qualora le norme penali della legislazione del Regno d'Italia richiamate in via suppletiva risultino per qualsiasi motivo inapplicabili e manchi qualunque altra disposizione penale speciale, e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice, salvi sempre i provvedimenti e le pene spirituali di diritto canonico, può applicare al colpevole la pena dell'ammenda fino a lire 9.000 o quella dell'arresto fino a sei mesi.

Art. 10. *Rappresentanza, Patrocinio
e Giuramento nel giudizio*

1. La rappresentanza ed il patrocinio nelle diverse sedi di giudizio sono regolati da apposita legge.

2. Nei giudizi il giuramento delle parti, dei testimoni, dei periti o di altri deve prestarsi nelle forme osservate dinanzi ai tribunali ecclesiastici.

16. Tanto in materia civile quanto in materia penale le funzioni di procuratore e di avvocato sono esercitate dagli avvocati concistoriali.

Tuttavia, fermo il disposto dell'articolo 9 lettera b, il Decano della Sacra Rota Romana può compilare un albo di persone aventi i necessari requisiti per l'esercizio delle professioni di procuratore e di avvocato dinanzi al giudice unico nella materia civile ed in quella delle contravvenzioni.

Per il tribunale di prima istanza il Decano della Sacra Romana Rota nomina le persone incaricate di esercitare le funzioni di notaio attuario e di ufficiale giudiziario o cursore.

[...]

19. Nei giudizi penali ed in quelli civili, anche nei casi in cui non si applichino le disposizioni sul procedimento del *Codex iuris canonici*, qualsiasi giuramento delle parti, dei testimoni, dei periti o di altri deve prestarsi nelle forme osservate dinanzi ai tribunali ecclesiastici.

Art. 11. *Istruzione scolastica*

1. Ferma restando la specificità dell'ordinamento vaticano, che si ispira in materia di istruzione e formazione alle indicazioni del Magistero della Chiesa con particolare riguardo alla primaria responsabilità dei genitori, l'istruzione scolastica è obbligatoria, dall'età di sei anni a quella di diciotto compiuti.

2. All'obbligo si soddisfa con la frequenza di strutture scolastiche legalmente riconosciute, secondo la legislazione dei diversi Stati, salvo che i genitori e tutori dimostrino di poter impartire priva-

21. La istruzione elementare è obbligatoria, dall'età di sei anni a quella di quattordici anni compiuti, per i fanciulli di ambo i sessi, i quali, finché non sieno istituite scuole nella Città del Vaticano, dovranno frequentare quelle di Roma che saranno designate dal Governatore, previo accordo colle autorità locali.

I genitori o tutori che contravvengano all'obbligo suindicato, sono puniti coll'ammenda fino a lire 500 o coll'arresto fino a dieci giorni, salvo quando dimostrino di poter impartire privatamente

tamente l'istruzione a loro cura e spese e con idonei strumenti didattici.

3. Con provvedimento amministrativo saranno stabilite le modalità applicative.

Art. 12. *Norme amministrative*

1. Salva specifica normativa vaticana e sotto le riserve indicate nell'art. 3, si osservano nella Città del Vaticano:

a) la legislazione dello Stato italiano vigente all'entrata in vigore della presente legge, compresi i regolamenti e i trattati ratificati dall'Italia e le norme di esecuzione dei trattati medesimi, concernente:

- 1) i pesi e misure di ogni genere;
- 2) i brevetti di invenzione e i marchi e brevetti di fabbrica;
- 3) le ferrovie;
- 4) le poste;
- 5) le telecomunicazioni ed i relativi servizi, sia su rete fissa che mobile, nelle loro diverse componenti;
- 6) la trasmissione dell'energia elettrica;
- 7) l'aviazione;
- 8) gli automobili e la loro circolazione;
- 9) la difesa contro le malattie infettive e contagiose;

b) le leggi dello Stato italiano, con i relativi regolamenti generali e speciali, e con i regolamenti della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Roma, concernenti la polizia edilizia ed urbana e l'igiene e la sanità pubblica.

2. In caso di necessità dettato da pubblica utilità, per l'acquisizione allo Stato di beni privati, l'utilizzo temporaneo dei medesimi, le prestazioni di opere e servizi, provvede il Presidente del Go-

l'istruzione a loro cura e spese e con idonei mezzi.

La pena può essere applicata due volte nel corso del medesimo anno scolastico.

20. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osservano nella Città del Vaticano:

a) la legge del Regno d'Italia sulle espropriazioni per pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e con decreto-legge 11 marzo 1923, n. 691, nonché gli articoli 30, 33 e 34 del regio decreto sull'esecuzione di opere pubbliche 8 febbraio 1923, n. 422.

Occorrendo per gravi ragioni, fuori dei casi previsti nella predetta legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, disporre dell'uso della privata proprietà immobiliare o acquistare la proprietà di cose mobili o usare delle medesime o richiedere prestazioni di opere, provvede il Governatore, con decreto eseguibile d'ufficio, contro pagamento di un equo corrispettivo, che egli fissa, salva l'azione dinanzi al giudice competente per la determinazione definitiva del corrispettivo medesimo.

Senza pregiudizio sia della esecuzione di ufficio sia dall'azione civile per la determinazione dell'indennità, chi non ottempera al decreto del Governatore nei casi suindicati e punito coll'ammenda fino a lire 9.000 o con l'arresto fino a sei mesi;

b) la legislazione del Regno d'Italia vigente alla entrata in vigore della presente, compresi i regolamenti relativi, e concernente:

- le antichità e le belle arti;
- le bellezze panoramiche;

vernatorato con decreto motivato, stabilendo il relativo indennizzo.

3. Per autorità dello Stato previste nelle leggi e nei regolamenti richiamati in quest'articolo si intende il Presidente del Governatorato, salvo espressa delega da parte del medesimo.

— la trasmissione dell'energia elettrica a distanza;

— le opere pubbliche, escluso quanto concerne gli appalti, che rimangono regolati dai contratti da concludersi di volta in volta e salva la disposizione dell'articolo 8 della legge di pari data n. V;

c) la legislazione del Regno d'Italia vigente come sopra, compresi i regolamenti, ed i trattati ratificati dal Regno d'Italia fino all'entrata in vigore della presente e le norme di esecuzione dei trattati medesimi, salva adesione, a suo tempo, a questi ultimi da parte della Città del Vaticano, concernenti:

- 1) i pesi e misure di ogni genere;
- 2) la proprietà artistica e letteraria;
- 3) i brevetti di invenzione e i marchi e brevetti di fabbrica;
- 4) le ferrovie;
- 5) le poste;
- 6) i telegrafi;
- 7) i telefoni;
- 8) la radiotelegrafia e la radiotelefonìa;
- 9) l'aviazione;
- 10) gli automobili e la loro circolazione;
- 11) la difesa contro le malattie infettive e contagiose.

Nei rapporti fra la Città del Vaticano e il Regno d'Italia nelle materie suindicate sono salve le speciali convenzioni, che vengano stipulate, le quali, se del caso, varranno in deroga alle norme sopra provvisoriamente richiamate;

d) in generale le leggi del Regno d'Italia con i relativi regolamenti generali e speciali e con i regolamenti della Provincia e del Governatorato di Roma, in

quanto concernono l'igiene e la sanità pubblica, la sicurezza ed integrità delle persone e delle cose, la polizia edilizia ed urbana ed in genere qualsiasi oggetto che, non essendo già regolato in questa od in altre leggi della Città del Vaticano, richiegga di essere giuridicamente disciplinato nella Città medesima, escluso tuttavia, salvo espresso richiamo, quanto attiene all'ordinamento degli enti od uffici pubblici, al trattamento economico e giuridico dei funzionari ed impiegati, ai corpi armati, ai contributi, sussidi e simili dell'amministrazione a favore dei sudditi, ai tributi, contributi ed oneri di spesa a favore dell'amministrazione imposti ai sudditi, alla contabilità ed alla finanza.

Al servizio di assistenza sanitaria provvede il Governatorato, secondo norme regolamentari da emanarsi dal Governatore.

Alle autorità del Regno d'Italia prevedute nelle leggi e regolamenti richiamati in quest'articolo si intende sostituito il Governatore o quel funzionario od ufficio dipendente dal medesimo all'uopo designato.

Art. 13. *Abrogazione ed entrata in vigore*

La presente legge sulle fonti del diritto sostituisce integralmente la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II. Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il primo ottobre 2008, anno IV del Nostro Pontificato.

BENEDETTO PP. XVI

25. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

PIO PP. XI

II. ARTÍCULOS SIN PARALELO EN LA NUEVA LFD

Abrogado por la Ley n. L, por la que se modifica la legislación penal y la legislación procesal penal, de 21 de junio de 1969

[AAS Suppl., 41 (1969), pp. 13-26]

5. Quando la pena stabilita per qualsiasi reato sia soltanto pecuniaria, l'imputato è sempre ammesso ad estinguere il corso dell'azione penale mediante oblazione, pagando la pena pecuniaria in quella misura che, entro i limiti del massimo e del minimo, sia fissata dall'avvocato concistoriale, cui sono affidate le funzioni di pubblico ministero, o da altra autorità preveduta dalla legge.

Questa regola vale per le contravvenzioni, anche se la pena pecuniaria sia stabilita alternativamente con quella restrittiva della libertà personale. La misura dell'oblazione in tal caso è determinata dal giudice delle contravvenzioni o da altro funzionario indicato dalla legge.

Quando sia imputato uno straniero e la pena stabilita per un reato sia alternativamente quella pecuniaria o quella restrittiva della libertà personale, il giudice non può applicare la prima di esse, se l'imputato non offra, prima del dibattimento, idonea cauzione per il pagamento del massimo della pena pecuniaria, mediante deposito dell'importo di essa, o mediante pegno od obbligazione personale anche cambiaria o fideiussione di un cittadino vaticano.

Abrogado por la Ley n. L, por la que se modifica la legislación penal y la legislación procesal penal, de 21 de junio de 1969

[AAS Suppl., 41 (1969), pp. 13-26]

6. Per i reati puniti con pena pecuniaria da leggi emanate per la Città del Vaticano la conversione della pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale, nei casi preveduti dal Codice penale del Regno d'Italia, si fa col ragguaglio di un giorno di pena restrittiva della libertà personale per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire della somma non pagata.

Abrogado por la Ley n. L, por la que se modifica la legislación penal y la legislación procesal penal, de 21 de junio de 1969

[AAS Suppl., 41 (1969), pp. 13-26]

8. Per qualsiasi reato, anche contravvenzionale, lo straniero imputato può essere arrestato fuori di flagranza, emettendosi all'uopo mandato di cattura, e non può essergli concessa libertà provvisoria, se non fornisca cauzione nei modi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 5.

La cauzione, quando la pena sia pecuniaria, non può essere inferiore al massimo della medesima.

Abrogado por la Ley n. L, por la que se modifica la legislación penal y la legislación procesal penal, de 21 de junio de 1969

[AAS Suppl., 41 (1969), pp. 13-26]

9. Per qualsiasi contravvenzione da chiunque commessa che sia accertata in flagrante da un ufficiale od agente di polizia giudiziaria, l'imputato è arrestato e condotto immediatamente, insieme ai testimoni presenti al fatto che l'ufficiale od agente creda necessari o che dall'imputato gli siano indicati, dinanzi al giudice delle contravvenzioni.

Il giudice stabilisce la somma che può essere offerta in oblazione, e se questa somma è pagata, l'azione penale è senz'altro estinta.

Quando non sia fatta oblazione al giudice, a meno che l'imputato non chieda un rinvio ed il giudice ravvisi fondati motivi per concederlo, previa, se si tratti di imputato straniero, prestazione di cauzione a tenore dell'ultimo comma dell'articolo 5 o assoggettamento alla custodia preventiva, si procede sommariamente nel modo seguente:

a) il giudice è assistito da un funzionario del Governatorato da lui scelto di volta in volta come cancelliere;

b) il giudice designa altro funzionario del Governatorato come pubblico ministero, e, se l'imputato non ha modo o tempo di scegliere un difensore, nomina difensore di ufficio un avvocato concistoriale od altra persona che reputi idonea e che sia presente o immediatamente reperibile;

c) i testimoni sono uditi con giuramento;

d) si redige processo verbale;

e) la sentenza è estesa e pubblicata nei motivi e nel dispositivo immediatamente;

f) l'appello, se proponibile, viene fatto con dichiarazione resa al cancelliere nell'udienza stessa.

Il giudizio di appello dinanzi al presidente del Tribunale di prima istanza, quando il giudizio dinanzi al giudice delle contravvenzioni si

sia svolto colla procedura sommaria suindziata, deve aver luogo con corrispondente procedura sommaria nei cinque giorni da quello della sentenza di primo grado.

Se l'appello non sia deciso nel termine suindicato, l'imputato che sia stato arrestato può essere posto in libertà provvisoria, anche senza cauzione.

Quando non si debba seguire la procedura sommaria di cui sopra, si applicano, in quanto sia possibile, anche ai giudizi contravvenzionali, le norme del Codice di procedura penale del Regno d'Italia, colle modificazioni stabilite per le contravvenzioni ai regolamenti comunali. La procedura per decreto può applicarsi soltanto ai cittadini vaticani.

Abrogado por la Ley n. L, por la que se modifica la legislación penal y la legislación procesal penal, de 21 de junio de 1969

[AAS Suppl., 41 (1969), pp. 13-26]

10. Le disposizioni speciali stabilite nei riguardi degli stranieri nei precedenti articoli non si applicano a quelli stranieri con il cui Stato la Città del Vaticano abbia un trattato, per il quale le condanne a pena pecuniaria pronunziate dai Tribunali vaticani siano esecutive mediante riscossione coattiva o, in difetto, mediante conversione della pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale nel territorio dello Stato medesimo.

[No tiene paralelo en la ley de 2008]

12. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il Codice di commercio del Regno d'Italia, insieme con le leggi che lo hanno modificato ed integrato e ai relativi regolamenti fino all'entrata in vigore della presente, e limitatamente alle cambiali, agli assegni bancari ed agli assegni circolari emessi o pagabili nella Città del Vaticano, nonché alle assicurazioni delle persone residenti o delle cose che si trovino in detta città.

Quando, a tenore della legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale, sia autorizzato nella Città del Vaticano l'impianto o l'esercizio di aziende od imprese commerciali od industriali, si intendono applicabili di pieno diritto, sempre che non sia disposto altrimenti

*Abrogado por el Motu proprio
Con la legge, de 1 de mayo de 1946*
[AAS, 38 (1946), pp. 170-172]

*Abrogado por el Motu proprio
Con la legge, de 1 de mayo de 1946*
[AAS, 38 (1946), pp. 170-172]

*Cfr. la Ley n. CXIX, que aprueba el
Ordenamiento judicial del Estado
de la Ciudad del Vaticano*
[AAS Suppl., 58 (1987), pp. 45-50]

nell'atto di autorizzazione, le norme generali e quelle speciali per la materia cui si riferisce l'azienda od impresa autorizzata, risultanti dal Codice di commercio, dalle leggi commerciali e dagli usi commerciali vigenti nella città di Roma.

14. Le attribuzioni che nel Codice civile e di procedura civile del Regno d'Italia o in altre leggi del Regno medesimo sono attribuite al Conciliatore od al Pretore in materia di esecuzione o nei procedimenti di volontaria giurisdizione, sono esercitate dal Presidente del Tribunale di prima istanza o da un giudice da lui designato.

15. Le cause civili di valore non superiore a lire cinquemila e quelle possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto nei casi preveduti nell'articolo 82 del Codice di procedura civile del Regno d'Italia, sono di competenza del Presidente del Tribunale di prima istanza o di un giudice da lui designato.

Per le dette cause si segue la procedura stabilita nel detto codice per i giudizi avanti i Pretori.

L'appello contro le sentenze rese nelle dette cause si porta al Tribunale di prima istanza.

Dinanzi a questo Tribunale e dinanzi alla Sacra Rota ed al Supremo Tribunale della Segnatura, per quanto concerne il giudizio civile di cognizione e le altre materie attinenti al processo civile, si osservano, in quanto applicabili, le norme dei canoni 1552 a 1998 del *Codex iuris canonici*.

17. Sono di competenza dei Tribunali della Città del Vaticano:

1) tutte le azioni in cui sia convenuto un cittadino avente nella Città del Vaticano la residenza od anche uno straniero autorizzato a risiedere in detta città a tempo indeterminato;

2) le azioni relative alle successioni delle persone indicate nel numero precedente;

3) le azioni relative alle successioni delle persone indicate nel numero le azioni in cui sia anche convenuto uno straniero, quando si tratti:

a) di azioni reali o personali relative a beni immobili o mobili esistenti nella Città del Vaticano;

b) di azioni nascenti da contratti che sieno stati conclusi o da fatti che sieno eseguiti nel territorio della detta Città, oppure le cui obbligazioni debbano ivi eseguirsi.

Cfr. la Ley n. CXIX, que aprueba el Ordenamiento judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano

[AAS *Suppl.*, 58 (1987), pp. 45-50]

18. I Tribunali Vaticani sono competenti a conoscere dei reati da chiunque commessi nel territorio della Città del Vaticano, sempre che, trattandosi di delitto l'autore del medesimo non si sia rifugiato in territorio italiano, o non sia fatta delegazione ai Tribunali del Regno d'Italia, il tutto secondo l'articolo 22 del Trattato 11 febbraio 1929.

Resta ferma la competenza dei Tribunali Vaticani anche per reati commessi in uno Stato estero, quando per i reati medesimi si possa procedere nel territorio dello Stato secondo le disposizioni del Codice penale del Regno d'Italia, e salvo anche in questo caso il disposto del citato articolo 22 del Trattato.

Cfr. art. 3 de la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, de 26 de noviembre de 2000

[AAS *Suppl.*, 71 (2000), pp. 75-83]

24. Al Governatore è delegata per tre anni la facoltà di emanare, in caso di assoluta necessità od urgenza, senza altra formalità, disposizioni di carattere generale, aventi forza di legge per la durata non eccedente tre mesi, per disciplinare le materie, per le quali la legislazione del Regno d'Italia è richiamata in via suppletiva, secondo gli articoli precedenti, o per qualunque materia non preveduta né altrimenti disciplinata. Tali disposizioni del Governatore si pubblicano per affissione alla porta degli unici del Governatorato e nel cortile di San Parnaso, od anche in altri luoghi, quando siano espressamente designati nelle disposizioni medesime, ed entrano in vigore nello stesso giorno della pubblicazione.